



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
RESERVADA*

CCPR/C/88/D/1453/2006
23 de noviembre de 2006

ESPAÑOL
Original: FRANCÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
88º período de sesiones
16 de octubre a 3 de noviembre de 2006

DECISIÓN

Comunicación N° 1453/2006

<i>Presentada por:</i>	André Brun (representado por el abogado François Roux)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado Parte:</i>	Francia
<i>Fecha de la comunicación:</i>	15 de noviembre de 2005 (fecha de la presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 16 de febrero de 2006 (no publicada como documento)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	18 de octubre de 2006
<i>Asunto:</i>	Condena penal por destrucción de cultivos de maíz transgénico
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Noción de "víctima"

* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

Cuestiones de fondo: Derecho a vivir en un entorno sano, derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

Artículos del Pacto: Apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 2; artículos 6 y 17 y párrafo a) del artículo 25

Artículos del Protocolo Facultativo:

Artículos 1 y 2

[Anexo]

Anexo

**DECISIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA DE
CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
-88º PERÍODO DE SESIONES-**

respecto de la

Comunicación N° 1453/2006*

Presentada por: André Brun (representado por el abogado François Roux)

Presunta víctima: El autor

Estado Parte: Francia

Fecha de la comunicación: 15 de noviembre de 2005 (fecha de la presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 18 de octubre de 2006,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1.1. El autor de la comunicación, fechada el 15 de noviembre de 2005, es André Brun, ciudadano francés, que afirma ser víctima de una violación por Francia de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 2, de los artículos 6 y 17, y del apartado a) del párrafo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está representado por el abogado François Roux. El Pacto y el Protocolo Facultativo entraron en vigor para Francia el 4 de febrero de 1981 y el 17 de mayo de 1984, respectivamente.

* Los siguientes miembros del Comité participaron en el examen de la presente comunicación: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Alfredo Castillero Hoyos, Sr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Sr. Edwin Johnson, Sr. Walter Kälin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rajsoomer Lallah, Sr. Michael O'Flaherty, Sra. Elisabeth Palm, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari Yrigoyen y Sr. Roman Wieruszewski.

De conformidad con el artículo 90 del reglamento del Comité, la Sra. Christine Chanet no participó en la adopción de la presente decisión.

Se adjunta al presente documento el texto de un voto particular del Sr. Rafael Rivas Posada.

1.2. El 3 de mayo de 2006, el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones decidió, en nombre del Comité, que la admisibilidad de la comunicación se examinase separadamente del fondo.

Antecedentes de hecho

2.1. El 28 de abril de 2000, el Ministro de Agricultura tras consultar a la comisión de estudio de la diseminación de productos resultantes de la ingeniería biomolecular, autorizó por decreto a la compañía Biogemma a proceder a un ensayo en campo abierto de organismos genéticamente modificados (OGM). Unas agrupaciones a las que pertenece el autor conminaron al Ministro de Agricultura a que pusiese fin a la dispersión de OGM operada por la compañía Biogemma, so pena de destrucción de los cultivos experimentales.

2.2. El 26 de agosto de 2001 se reunieron en Cléon d'Andran (Francia) 200 personas, entre ellas el autor, para manifestarse contra el cultivo de los OGM. La manifestación tenía por objeto destruir una parcela de maíz transgénico, depositar las plantas arrancadas delante de la Prefectura y que el Prefecto recibiera a una delegación de ellos. Los manifestantes destruyeron la parcela.

2.3. A raíz de estos acontecimientos, la compañía Biogemma, responsable del cultivo de las plantas de maíz transgénico destruidas, hizo citar directamente a diez de las personas que habían participado en esta acción para que compareciesen ante el Tribunal Penal de Valence por destrucción de bienes ajenos cometida en grupo.

2.4. El 8 de febrero de 2002, el Tribunal Penal de Valence condenó a las diez personas a sendas multas y penas de cárcel. El autor fue condenado a tres meses de cárcel con suspensión condicional y a una multa de 2000 euros. El 14 de marzo de 2003, el Tribunal de Apelación de Grenoble confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia en lo que respecta a la condena del autor, pero rebajó la pena a dos meses de cárcel con suspensión condicional y a una multa de 300 euros. Por decisión de 28 de abril de 2004, el Tribunal de Casación desestimó el recurso del autor.

La denuncia

3.1. El autor se considera víctima de la violación por Francia de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 2, del artículo 17 y del apartado a) del párrafo 25 del Pacto. En lo que respecta al artículo 17, el autor estima que, dada la incertidumbre en torno a la plantación experimental de OGM en el campo, los tribunales nacionales tenían que haber reconocido la legitimidad de la acción de los que arrancaron el maíz transgénico sembrado, diciendo que éstos habían obrado por necesidad para proteger el medio ambiente y la salud. Sostiene que el Estado Parte no ha tomado las disposiciones necesarias para impedir la violación del artículo 17 en sentido lato. El autor expone largamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de contaminación. Estima que "el Comité deberá proceder por analogía, remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y hacer una interpretación extensa del artículo 17", según la cual la noción de vida privada y familiar abarca el derecho a vivir en un entorno sano. Si el Comité interpreta así esta disposición, corroborará que se ha violado el artículo 17.

3.2. El autor invoca el "principio de precaución" y estima necesario tener en cuenta los riesgos a mediano y largo plazo de los OGM para la salud y el medio ambiente. Sostiene que, en su estado actual, el conocimiento de la utilización de los OGM no ha aportado ninguna respuesta precisa y coherente con respecto a los riesgos a largo plazo para el medio ambiente y la salud. Por consiguiente, se debería aplicar el principio de precaución. En ausencia de una intervención del Estado, el autor considera que, con la destrucción del maíz transgénico sembrado, las personas condenadas en Francia, como el autor, actuaron con objeto de evitar todo riesgo para la salud pública y el medio ambiente, ya que se trata de experimentos que no pueden ser objeto de ningún control *a priori*.

3.3. El autor considera que el cultivo de plantas transgénicas en campo abierto resulta en la contaminación ineluctable de los cultivos tradicionales por los OGM sembrados. A su juicio, la distancia mínima prevista por el momento para separar el cultivo experimental de OGM de las siembras sin OGM es ineficaz. De ahí que la destrucción de las plantas de maíz transgénico responda a una lógica de preservación de los bienes de los agricultores tradicionales y biológicos.

3.4. El autor sostiene que no se ha previsto ningún sistema de indemnización de los agricultores tradicionales y biológicos cuya producción pudiese contener OGM de origen ajeno. Además, es difícil dar con los responsables, a causa de la complejidad del montaje jurídico que utilizan las empresas para llevar a cabo los experimentos de OGM en campo abierto.

3.5. El autor estima que actuó por la necesidad que sentía de proteger su entorno. Recuerda que, en el derecho francés, lo que caracteriza el sentimiento o el efecto de necesidad es la situación en que se encuentra quien, para salvaguardar un interés superior, no tiene más remedio que realizar un acto prohibido.

3.6. En lo que respecta al artículo 25, el autor estima que en 2001, fecha del hecho en el que participó, no se había organizado ningún debate público que permitiese al ciudadano medio tomar parte activa en las decisiones de los poderes públicos sobre el medio ambiente. De ahí que grupos de campesinos y ciudadanos decidiesen arrancar las siembras para que se entablase un debate público con el Estado y se creasen comisiones para reflexionar sobre la cuestión de la utilización de cultivos de OGM y sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente. El autor pretende que la mayoría de los franceses (agricultores y consumidores) se oponen al cultivo de los OGM, pero que el Estado tiene una posición muy restrictiva que consiste en seguir autorizando el ensayo de este tipo de cultivos en los campos sin consultar previamente a la población al respecto. Por lo tanto, el autor considera que el Estado Parte no ha respetado las disposiciones del apartado a) del artículo 25 y se ha extralimitado en materia de política ambiental.

3.7. En cuanto a los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 2, el autor estima que los ciudadanos no tienen ningún medio legalmente reconocido de hacer valer sus argumentos y orientar las decisiones de los poderes públicos en materia de OGM. Añade que la legislación francesa no le permite un acceso efectivo a la justicia antes de la experimentación de los OGM en los campos y que no puede, pues, oponerse a las decisiones que afectan directamente su vida privada y familiar.

3.8. En lo que respecta al agotamiento de los recursos internos, el autor sostiene que ha invocado esencialmente el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza el respeto de la vida privada y familiar, a semejanza del artículo 17 del Pacto. Así pues, el autor considera que ha agotado los recursos internos.

3.9. El autor indica que este mismo asunto no ha sido sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si lo han sometido en cambio otros reclamantes que también fueron condenados por el Tribunal Penal de Valence.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad

4.1. En una nota verbal de 20 de abril de 2006, el Estado Parte refuta la admisibilidad de la comunicación. En primer lugar, la comunicación es inadmisibles porque falta la calidad de víctima. Recuerda que los denunciantes deben tener un interés personal en la acción y que el Protocolo Facultativo no puede en modo alguno aceptar una *actio popularis* ni permitir el examen en abstracto de las legislaciones nacionales¹. Para que el autor pueda considerarse víctima, debe establecer que el texto impugnado fue aplicado en detrimento suyo, causándole así un perjuicio directo, personal e indudable. En este caso, el autor pretende haber sido víctima de una violación de su derecho al respeto de su vida privada, garantizado en el artículo 17 del Pacto, a causa de su condena penal. El Estado Parte subraya que el autor fue condenado por los tribunales penales por la destrucción o degradación voluntaria de bienes ajenos cometida en grupo, hechos reprimidos en el artículo 322-1 y ss. del Código Penal. Esta condena no guarda relación, directa o indirecta, con la reglamentación relativa a los OGM. El Estado Parte observa además que el autor no se queja de que se haya atentado personalmente contra su salud o su entorno. En consecuencia, la invocación de un simple riesgo no definido con certeza no se puede considerar un elemento determinante que confiera al autor la calidad de víctima en virtud del Pacto.

4.2. En segundo lugar, el Estado Parte estima que la comunicación es inadmisibles por incompatibilidad *ratione materiae* con la queja motivada en el artículo 17 y con aquella motivada en el artículo 25. El derecho a una alimentación sana y a un medio ambiente sano no se desprende en modo alguno del texto del artículo 17 del Pacto ni de su interpretación por el Comité en la Observación general N° 16 relativa a este artículo. Al contrario, la noción de vida privada y familiar se ha de definir por oposición a la esfera pública. El Estado Parte estima, pues, que la comunicación es incompatible *ratione materiae* con el artículo 17. En lo que respecta al artículo 25, el autor afirma que "los ciudadanos que participaron en la acción del 26 de agosto de 2001 obraron así porque no disponían de medios legales efectivos que permitiesen a la sociedad civil reconocerse en las leyes aprobadas". El Estado Parte considera que tal interpretación del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos no se desprende del artículo 25 ni de la Observación general N° 25 del Comité. La comunicación es pues incompatible *ratione materiae* con el artículo 25.

4.3. En tercer lugar, el Estado Parte considera que la comunicación es inadmisibles porque no se han agotado los recursos internos útiles. Recuerda que el motivo de la reclamación del autor es

¹ Véase *Aumeeruddy-Cziffra y otras 19 mujeres mauricianas c. la isla de Mauricio*, comunicación N° 35/1978, dictamen aprobado el 9 de abril de 1981, párr. 9.1.

el decreto del Ministro de Agricultura del 28 de abril de 2000 que autorizaba a la compañía Biogemma a proceder a una difusión voluntaria de OGM. Recuerda asimismo que, en derecho francés, existe la posibilidad de pedir la anulación de un decreto ministerial interponiendo recurso por abuso de poder ante el Consejo de Estado. El efecto de tal recurso, cuando el juez administrativo comprueba la ilicitud del acto, es que éste se anula retroactivamente. En el presente caso, en lugar de interponer este recurso legal de que dispone toda persona que se considera lesionada por una decisión administrativa, el autor prefirió conminar al Ministro de Agricultura a que interrumpiese la diseminación de OGM y destruyese los bienes de terceros. Por tanto, el autor no interpuso los recursos útiles de que disponía.

4.4. En último lugar, el Estado Parte considera que la comunicación es inadmisibles porque constituye un abuso de derecho. En efecto, el objetivo de la comunicación presentada por el autor es iniciar un debate público sobre el cultivo de OGM en Francia. Por consiguiente, constituye a la vez un vicio de procedimiento y un abuso de derecho.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte

5.1. En sus comentarios del 5 de julio de 2006, el autor sostiene que se considera personalmente afectado en calidad de víctima. Recuerda que los hechos por los que se le condenó están directamente relacionados con la falta de una reglamentación en materia de OGM, puesto que su argumentación inicial consistía en que actuó por necesidad para evitar un peligro inminente relacionado con la plantación de maíz transgénico en campo abierto. El autor se considera, pues, víctima directa de un caso concreto de aplicación de disposiciones legislativas que atentan contra el ejercicio de sus derechos garantizados en el Pacto. Invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha procedido a un control abstracto del cumplimiento de la Convención en algunas de sus decisiones y distingue la situación de los autores de la comunicación *Bordes y Temeharo c. Francia* de la suya porque se considera una posible víctima directa de la amenaza que supone la diseminación de OGM en el medio ambiente durante los experimentos en campo abierto que son un peligro inminente y real para el disfrute de su vida privada y familiar y su calidad de vida².

5.2. En cuanto a la competencia *rationae materiae* del Comité en relación con el artículo 17, el autor insiste en que existe un vínculo entre la preservación del medio ambiente y la protección efectiva de ciertos derechos y libertades fundamentales consagrados por los artículos 17 y 6 del Pacto. Cita varios instrumentos internacionales pertinentes y recuerda que el Comité, en su Observación general N° 16, precisa que las injerencias autorizadas por los Estados deben estar previstas en la ley y que ésta debe a su vez corresponder a las disposiciones, fines y objetivos del Pacto. El derecho al respeto de la vida privada y familiar, y del domicilio impone al Estado la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a los particulares de toda injerencia de los poderes públicos o de particulares en un derecho garantizado. Según el autor, la injerencia debe estar justificada y ser proporcionada en relación con las disposiciones, fines y objetivos del Pacto. En este caso, la injerencia de los poderes públicos reside en su inacción, dado que no toma las medidas necesarias para prevenir los riesgos que la diseminación de OGM en campo abierto entraña para la salud y el entorno del autor. El Estado Parte ha incluso violado una vez

² Véase *Bordes y Temeharo c. Francia*, comunicación N° 645/1995, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 22 de julio de 1996, párr. 5.5.

más los derechos del autor al perseguirle por haber querido que se pusiera fin a la violación de que era víctima y al conseguir que fuera condenado.

5.3. En lo que respecta a la competencia *ratione materiae* del Comité en relación con el artículo 25, el autor insiste en que los ciudadanos no disponen de un recurso efectivo y eficaz para prevenir los riesgos para el medio ambiente y la salud pública que entraña el ensayo de los OGM en campo abierto. Afirmar que el apartado a) del artículo 25 supone una obligación procesal inherente al derecho garantizado de participar en el proceso decisorio y que este aspecto del procedimiento implica el derecho a la información, a la participación y a vías de recurso apropiadas. Recuerda que, en el momento de los hechos, no disponía de medios para reunir información útil y pertinente que le permitiera participar en el proceso decisorio de las autoridades públicas encaminado a autorizar la siembra de OGM en campo abierto.

El artículo 25 se ha violado por esta razón, ya que las autoridades públicas no permitieron que el autor participara en el proceso decisorio en materia de medio ambiente. El autor sostiene que las autoridades públicas no hicieron los estudios de evaluación previa requeridos, ni informaron a la población de los posibles riesgos de la plantación de los OGM en el campo. De ahí que, el Consejo de Estado haya revocado recientemente la decisión del Ministro de Agricultura de autorizar la diseminación voluntaria de maíz transgénico alegando que el informe técnico, que debe contener todos los elementos para evaluar el efecto de los ensayos en la salud pública y el medio ambiente, era irregular³. El autor considera, pues, perfectamente fundado invocar el apartado a) del artículo 25 junto con los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 2.

5.4. En cuanto al agotamiento de los recursos, el autor considera que ha agotado todos los recursos internos puesto que el Tribunal de Casación desestimó su recurso el 28 de abril de 2004. En lo que respecta al sometimiento de la causa a la jurisdicción contencioso-administrativa, el autor precisa que el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo no prevé el agotamiento de todas las vías de recurso internas disponibles existentes en el plano constitucional, administrativo, civil y penal. Para que la comunicación sea admisible, no es obligatorio agotar todas las vías de derecho *imaginables*. Él recuerda que no podía someter la causa a la jurisdicción contencioso-administrativa puesto que no se había tomado ninguna decisión administrativa en contra suya y que, por esta razón, no disponía inmediatamente de ningún recurso administrativo. En todo caso, en esta fase del procedimiento ya no tiene la posibilidad de un recurso administrativo. Aunque el Estado Parte ha reprochado a los autores de varias comunicaciones precedentes no haber acudido a las instancias administrativas, el autor recuerda que, sin embargo, el Comité había concluido que podía examinarlas⁴.

5.5. El autor afirma que, dado el peligro que supone la contaminación de la agricultura tradicional y orgánica por el cultivo de OGM, no podía diferir su intervención ni esperar el resultado judicial de una demanda de anulación de la autorización de sembrar los OGM en el campo. De todas maneras, la decisión del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo habría

³ Consejo de Estado, *Fédération des syndicats agricoles MODEF c. Monsanto SAS*, decisión de 28 de abril de 2006.

⁴ Véanse *Maillé c. Francia*, comunicación N° 689/1996, dictamen aprobado el 10 de julio de 2000, párr. 6.3, y *Vernier y Nicolas c. Francia*, comunicaciones Nos. 690-691/1996, dictamen aprobado el 10 de julio de 2000, párr. 6.2.

sido posterior a la siembra de los OGM y no habría permitido impedir la diseminación y la contaminación de los demás cultivos por la experimentación en campo abierto con los OGM. El autor recuerda que, en casos análogos, las acciones judiciales ante los tribunales administrativos para que se anulase la autorización de sembrar OGM en campo abierto no habían prosperado sino hasta dos años después, lo que dio a la experimentación de OGM el tiempo necesario para contaminar los cultivos tradicionales y orgánicos vecinos.

5.6. Por último, el autor añade que existe asimismo violación del artículo 6 y sostiene que la promoción de un medio ambiente sano contribuye a la protección del derecho a la vida. Cita una decisión del Comité sobre los desechos radioactivos en la que el Comité había observado que la comunicación suscitaba cuestiones graves en lo que atañe a la obligación de los Estados Partes de proteger la vida humana habida cuenta del párrafo 1 del artículo 6, aunque sin considerar que se había violado esta disposición⁵.

Deliberaciones del Comité

6.1. De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la denuncia sometida en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si la comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2. De conformidad con el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3. En cuanto a las alegaciones del autor en relación con los artículos 6 y 17 del Pacto, el Comité recuerda que nadie puede, en abstracto y por *actio popularis*, impugnar una ley o una práctica que considere contraria al Pacto⁶. Quien se pretenda víctima de la violación de un derecho protegido en el Pacto deberá demostrar bien que el Estado Parte, por acción u omisión, ha atentado contra el ejercicio de su derecho, bien que el atentado es inminente, fundándose por ejemplo en el derecho en vigor o en una decisión o una práctica judicial o administrativa. En el presente caso, el Comité observa que los argumentos del autor (véanse los párrafos 3.2 a 3.5) se refieren a los riesgos generales que resultarían de los cultivos de OGM y afirma que los hechos relatados no demuestran que la posición del Estado Parte en relación con el cultivo de plantas transgénicas en campo abierto represente para el autor una violación efectiva o una amenaza inminente de violación de su derecho a la vida y al respeto de la vida privada y familiar, y del domicilio. Después de examinar los argumentos invocados y las informaciones que tiene ante sí,

⁵ Véase *E. H. P. c. el Canadá*, comunicación N° 67/1980, decisión de inadmisibilidad adoptada el 27 de octubre de 1982, párr. 8.

⁶ Véanse *E. P. y otros c. Colombia*, comunicación N° 318/1988, decisión de inadmisibilidad adoptada el 25 de julio de 1990, párr. 8.2, y *Aumeeruddy-Cziffra y otras 19 mujeres mauricianas c. la Isla de Mauricio*, comunicación N° 35/1978, dictamen aprobado el 9 de abril de 1981, párr. 9.2.

el Comité llega a la conclusión de que el autor no se puede pretender "víctima" de una violación de los artículos 6 y 17 del Pacto en el sentido del artículo 1 del Protocolo Facultativo⁷.

6.4. El Comité toma nota de la denuncia del autor con arreglo al párrafo a) del artículo 25 del Pacto, según la cual el Estado Parte lo ha privado del derecho y de la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos en lo que respecta al cultivo de plantas transgénicas en el campo. El Comité recuerda que los ciudadanos también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo su influencia a través del debate y el diálogo públicos con sus representantes elegidos y de su capacidad de organizarse. En este caso, el autor participó en el debate público en Francia de la cuestión del cultivo de plantas transgénicas en el campo; lo hizo por intermedio de sus representantes elegidos y a través de una asociación. Dadas las circunstancias, el Comité estima que el autor no ha demostrado, a efectos de admisibilidad, la alegación de que se ha violado su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. Esta parte de la comunicación es, pues, inadmisibles en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo⁸.

6.5. El Comité recuerda que los particulares sólo pueden invocar el artículo 2 del Pacto en relación con otras disposiciones y señala que el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 estipula que todos los Estados Partes se comprometen a "garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo". El apartado b) del párrafo 3 del artículo 2 garantiza protección a las presuntas víctimas si sus reclamaciones están suficientemente fundamentadas para que sean defendibles en virtud del Pacto. No se puede exigir con razón que un Estado Parte, en aplicación del apartado b) del párrafo 3 del artículo 2, procure que esos procedimientos estén disponibles incluso para las reclamaciones menos fundadas⁹. Considerando que el autor de la presente comunicación no ha fundamentado su reclamación a efectos de admisibilidad en virtud del artículo 25, su alegación de violación del artículo 2 del Pacto es también inadmisibles en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

⁷ Véanse *E. W. y otros c. los Países Bajos*, comunicación N° 429/1990, decisión de inadmisibilidad adoptada el 8 de abril de 1993, párr. 6.4; *Bordes y Temeharo c. Francia*, comunicación N° 645/1995, decisión de inadmisibilidad adoptada el 22 de julio de 1996, párr. 5.5; *Beydon y otros 19 miembros de la asociación "DIH Mouvement de protestation civique"*, comunicación N° 1400/2005, decisión de inadmisibilidad adoptada el 31 de octubre de 2005, párr. 4.3, y *Aalbersberg y otros c. los Países Bajos*, comunicación N° 1440/2005, decisión de inadmisibilidad adoptada el 12 de julio de 2006, párr. 6.3.

⁸ Véase *Beydon y otros 19 miembros de la asociación "DIH Mouvement de protestation civique" c. Francia*, comunicación N° 1400/2005, decisión de inadmisibilidad adoptada el 31 de octubre de 2005, párr. 4.5.

⁹ Véanse *Kazantzis c. Chipre*, comunicación N° 972/2001, decisión de inadmisibilidad adoptada el 7 de agosto de 2003, párr. 6.6, y *Faure c. Australia*, comunicación N° 1036/2001, dictamen aprobado el 31 de octubre de 2005, párr. 7.2.

7. Por lo tanto, el Comité decide:

- a) Que la comunicación es inadmisibile en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo Facultativo;
- b) Que la presente decisión se comunique al Estado Parte y al autor.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto francés.
Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité.]

Apéndice

Voto en disidencia parcial del miembro del Comité Hipólito Solari-Yrigoyen

Disiento parcialmente con la opinión de la mayoría. Concuero en la declaración de inadmisibilidad, pero la fundo, además del artículo 2 del Protocolo Facultativo en el artículo 3 del mismo, pero coincido con la opinión del Estado Parte (párr. 4.4) que el autor ha incurrido en abuso del derecho al presentar la comunicación sin fundamento ni pruebas de su alegada condición de víctima.

[*Firmado*]: Hipólito Solari-Yrigoyen

[Hecho en español, francés e inglés, siendo el español la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea.]
